



ANEXO IV

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL FRAUDE

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes participa en la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y en concreto de las reformas e inversiones en los siguientes Componentes: Componente 19: Plan nacional de Capacidades digitales (*digital skills*), inversiones C19.I1 y C19.I2; Componente 20: Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, reformas C20.R1 y C20.R2, e inversiones C20.I1, C20.I2 y C20.I3; Componente 21: Modernización y digitalización del sistema educativo, reformas C21.R1 y C21.R2, e inversiones C21.I1, C21.I2 y C21.I3; Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, Inversión C23.I1, y Componente 26: Plan de Fomento del Sector del Deporte, reformas C26.R1, C26.R2 y C26.R3, e inversiones C26.I1, C26.I2 y C26.I3.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia señala la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Este Ministerio manifiesta su compromiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El personal del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y de organismos y entidades dependientes, en su carácter de empleados públicos, asume y comparte este





compromiso teniendo entre otros deberes los de “*velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres*” (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

El Departamento dispone de un Plan de medidas antifraude para poner en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude y la corrupción basado en un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude que dé garantías de que el gasto en que se ha incurrido en actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de conflicto de interés, fraude y corrupción. Se ha partido de la evaluación del riesgo de fraude realizada al efecto. Adicionalmente, se cuenta con procedimientos para prevenir, detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y para el seguimiento de las mismas.

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. En definitiva, el Departamento tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, en caso de producirse.

EL SUBSECRETARIO
(Firmado electrónicamente)

Santiago Antonio Roura Gómez

